LITORALPRESS

Fecha: 22-01-2026
Medio: La Segunda
Supl. : La Segunda
Tipo: Noticia general
Título: “Chile no puede acoger a todos quienes desean ingresar, reconocerlo no es falta de humanidad”

Pág. : 14
Cm2: 678,2
VPE: $ 1.506.193

Tiraje: 11.692
Lectoría: 33.709
Favorabilidad: No Definida

Guillermo Pérez Ciudad:

“Chile no puede acoger a todos quienes desean ingresar, reconocerlo no es falta de humanidad”

Mane Cárcamo

Guillermo Pérez Ciudad, abogado de la U. Adolfo Ibáñez e investigador del IES, aprendió a contar lo justo en su casa cada vez que viaja al norte a investigar para su tesis doctoral en Ciencia Política —posgrado que sigue en la Universidad de Texas en Austin—. ¿La razón? Su indagación lo lleva a estudiar la llegada, consolidación y las formas de ejercicio de autoridad del Tren de Aragua en Chile.

La situación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, el desafío migratorio y el modo de operación de la banda criminal más peligrosa de Latinoamérica, son algunos de los temas que aborda Pérez —especializado en política comparada y derecho público— quien a través de su trabajo académico, busca comprender cómo el crimen organizado logró instalarse en uno de los estados más sólidos de la región.

Una de las principales conclusiones del recorrido de Pérez es la total ausencia del Estado en amplias zonas de territorio. “Por ejemplo, en Alto Hospicio hay asentamientos precarios en pleno desierto que, en la práctica, se asemejan a favelas, con barrios a los que cuesta incluso ingresar y donde no está claro qué ocurre puertas adentro. Desde Santiago se habla del norte sin comprender realmente la soledad, el abandono y la falta de oportunidades que se viven ahí. Esa distancia entre el discurso central y la realidad territorial explica muchas cosas que, de otro modo, parecen incomprensibles”.

Y agrega: “La sensación de decadencia y de lugares a los que pareciera que a nadie le importan es muy fuerte”.

“La crisis migratoria es algo que no logramos dimensionar”

—¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está pasando con Venezuela?

—Se ha dicho mucho que esto representa una especie de derrota del derecho internacional. Sin embargo, durante los 26 años que duró el chavismo, el derecho internacional fue incapaz de detener las torturas, el hambre, las desapariciones, las ejecuciones, la migración de casi el 30% de la población, las elecciones fraudulentas. Quienes hoy defienden a rajatabla el derecho internacional también debieran hacerse la pregunta por sus límites y problemas. No había, a mi juicio, ninguna posibilidad real de que Maduro dejara el poder por las buenas. Existe una crítica genuina —y comprensible— respecto de que aquí se estarían vulnerando principios del derecho internacional. Ese punto es atendible: cuando se abandonan las reglas, la fuerza tiende a imponerse. Pero esas reglas fueron despreciadas primero por quienes hoy las invocan de manera selectiva. Muchos de los que hoy alegan una violación al derecho internacional hicieron vista gorda, o incluso respaldaron, los 26 años de dictadura en Venezuela. Se trata, en general, de sectores vinculados a la nueva izquierda que suelen instrumentalizar instituciones jurídicas relativamente abstractas según su conveniencia.

—Esta crítica suele venir del PC o del Frente Amplio. Sin embargo, también ha sido planteada por personas como Benjamín Salas, exasesor internacional de Sebastián Piñera. Él sostiene que defender el derecho internacional exige aceptar una premisa a veces incómoda: que la violación de las normas por parte de un régimen no habilita a otros estados a violarlas en respuesta.

—Sí, pero lo que Benjamín Salas no dice es que esto viene de mucho antes. Aquí existía todo un entramado jurídico que pudo haberse utilizado y que simplemente no se usó. Hubo un conjunto de autoridades —distintos gobiernos de América Latina— que no hicieron nada, o que decidieron no aplicar las normas del derecho internacional disponibles para evitar que esta situación se consolidara. Pienso en los distintos gobiernos latinoamericanos que colaboraron con el chavismo y se mantuvieron como cómplices en distintas etapas: los Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Lula. Hoy hacen declaraciones conjuntas condenando el arresto, pero no hubo una sola declaración conjunta condenando al régimen o el fraude electoral. Ni siquiera en la convención organizada por el Presidente Boric —paradójicamente llamada “Democracia Siempre”— hubo una condena clara a lo que ocurría en Venezuela. Esto también se puede observar en el caso chileno. Recuerdo las durísimas críticas que re-

El investigador del IES está desarrollando un trabajo sobre la instalación del Tren de Aragua en Chile y la forma en que la inmigración ha cambiado el paisaje social del país.

LITORALPRESS

Fecha: 22-01-2026
Medio: La Segunda
Supl. : La Segunda
Tipo: Noticia general
Título: **“Chile no puede acoger a todos quienes desean ingresar, reconocerlo no es falta de humanidad”**

Pág. : 15
Cm2: 658,3
VPE: $ 1.462.079

Tiraje: 11.692
Lectoría: 33.709
Favorabilidad: No Definida

cibió el Presidente Piñera cuando fue a Cúcuta y promovió con fuerza a Juan Guaidó como presidente interino. También recuerdo que Beatriz Sánchez (expresidenciable, hoy senadora) no hablaba de dictadura: decía que Venezuela era un país “en crisis”.

—Sin embargo, Gabriel Boric siempre ha sido crítico de Venezuela.

—Ha sido crítico de Venezuela, sí, pero también se trata de una política exterior bastante performativa. Una política exterior de Twitter, donde se dice mucho, pero se hace poco. Hoy es muy fácil decir que Venezuela es una dictadura, pero la pregunta es en qué se traduce eso efectivamente. El Presidente ha sido presentado como valiente por condenar una dictadura evidente, pero eso no ha tenido consecuencias prácticas. Incluso después de conocerse antecedentes de que el asesinato de Ronald Ojeda habría sido ordenado por Diosdado Cabello, el Gobierno optó por esperar a que los tribunales resolvieran. Y resulta llamativo que ahora, cuando se detiene al dictador que habría ordenado un ataque en territorio chileno, el Presidente reaccione con mayor indignación.

—Has sido crítico de la postura del PC en este asunto.

—Es que me parece todavía más sorpresiva la pasividad del Presidente Boric y de la opinión pública frente al hecho de que el PC —aliado histórico del régimen chavista— ocupe cargos relevantes en áreas tan sensibles como defensa y seguridad bajo la actual administración. Más aún cuando ese partido nunca ha adoptado una posición clara sobre el caso de Ronald Ojeda, ni ha reconocido los vínculos evidentes entre el régimen chavista y organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que han sido documentados por investigaciones rigurosas y ampliamente conocidas.

—Desde una perspectiva más amplia: ¿cuándo y cómo crees que se fue gestando en Chile el sentimiento antimigratorio?

—Si tuviera que identificar un hecho noticioso particularmente potente, que marcó un antes y un después, diría que fue la marcha antiinmigración de Iquique en 2021. Fue un evento de altísimo impacto mediático, casi un prestallido por sus características y por la intensidad de las reacciones que generó. Esa movilización mostró con mucha claridad cómo la migración estaba tensionando ciertos territorios. Durante esa jornada, se quemaron pertenencias de migrantes —coches, carpas— que estaban instalados en una plaza; fue un episodio muy duro y fuerte para mucha gente. Y sin relativizar en absoluto lo grave que es quemar las pertenencias de otras personas, hay que decir que muy pocos conocen el contexto que vivía Iquique y el norte del país en ese momento. La crisis migratoria en el norte fue de una magnitud que, incluso hasta hoy, no hemos logrado dimensionar adecuadamente.

“El narcotráfico chileno es mucho más visual y ostentoso”

—Tú hablas de un crimen organizado extranjero “extractivo”, ¿a qué te refieres?

—Esa es una de las ideas que desarrollo en mi tesis doctoral. Lo denomino así porque, a diferencia del crimen organizado clásico —por ejemplo, el narcotráfico tradicional, encarnado en figuras como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán—, no busca construir legitimidad social ni vínculos con la comunidad. El crimen organizado clásico, con todos sus matices, solía ofrecer algún tipo de protección o asistencia: compraba casas, ayudaba con medicamentos, prestaba servicios a la población local. En cambio, el crimen organizado extranjero que hoy opera en Chile —particularmente de origen venezolano o colombiano— funciona casi exclusivamente a través de la coerción. No controla territorios amplios como poblaciones completas, condominios o tomas enteras. Se instala en nodos muy específicos: edificios, blocks, departamentos, en donde ejerce terror de manera extremadamente violenta. Cuando el Estado interviene, se desplaza rápidamente a otro punto. Es un modelo altamente transaccional y móvil.

> “El criminal extranjero muestra una muy baja preocupación por su propia vida y por la ajena. Todo opera con escaso apego a códigos y sin mayor consideración por niños o familias”.

> “Trinidad Steinert hizo un gran trabajo en Tarapacá. Su nombramiento a nivel político también es simbólico: muestra que la derecha puede mirar más allá de Santiago”.

—No tiene ese lado benefactor, por decirle de alguna forma.

—Se trata de un crimen que no ofrece ningún tipo de “bienestar”, ni siquiera en un sentido informal o distorsionado. Su lógica es puramente extractivista: obtener la mayor cantidad de recursos posibles en el menor tiempo posible, mediante coerción brutal y violencia extrema. El narco local, en muchos casos, cumple un rol de padrinazgo dentro de la comunidad y actúa conforme a ciertos códigos internos.

—¿En qué se diferencia el perfil del criminal extranjero al del narco chileno?

—El criminal extranjero —en particular el de origen venezolano— muestra una muy baja preocupación por su propia vida y por la ajena. Todo opera de manera mucho más rápida, con escaso apego a códigos y sin mayor consideración por adultos mayores, niños o familias. También se observa, en muchos casos, una débil noción de futuro y eso se refleja incluso en su forma de vida. No suelen ostentar grandes lujos ni exhibir riqueza de manera visible: no compran autos de alta gama ni grandes joyas. Muchos guardan el dinero literalmente bajo el colchón y llevan vidas aparentemente normales. El caso de “El Estrella”, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, es ilustrativo: vivía en un departamento en Quilpué, llevaba una vida tranquila, paseaba a su perro, se comportaba como cualquier persona común, mientras cometía delitos de extrema gravedad. Las motivaciones detrás de este tipo de criminalidad son distintas y menos visibles. Esto contrasta fuertemente con el narcotráfico chileno, que es mucho más visual y ostentoso. Basta observar ciertos videos de la escena urbana chilena, donde se exhiben mujeres, billetes, autos, drogas, casas en barrios acomodados.

—En Chile hay más de 300 mil migrantes en situación irregular, entre ellos niños que han nacido en el país, lo que vuelve el tema particularmente complejo desde el punto de vista humanitario.

—Totalmente de acuerdo. Lo ocurrido en Iquique ilustra bien un problema de fondo: la migración se ha abordado casi exclusivamente desde una lógica moral, dividiendo el debate entre “buenos” y “malos”, cuando en realidad es un fenómeno que debe analizarse políticamente. Esto, porque afecta la convivencia dentro de la comunidad y tiene consecuencias tanto para quienes reciben migrantes como para los propios migrantes. Una migración desbordada golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables, incluidos los migrantes irregulares, que han sido las principales víctimas del Tren de Aragua. Además, la migración masiva impacta también a los países de origen, generando una enorme pérdida de capital humano. El caso de Venezuela —que ha perdido cerca del 30% de su población— es una tragedia con efectos profundos para cualquier proceso futuro de reconstrucción.

—Pareciera que, al menos en la discusión pública, la complejidad del asunto es pasada por alto.

—Sí, de hecho, todo esto nos obliga a hacernos preguntas clave: ¿qué podemos exigir a quienes ingresan al país?, ¿qué responsabilidades tienen los migrantes para integrarse?, y ¿qué deberes tiene la sociedad de acogida? Por otra parte, está la dimensión del realismo: los estados tienen límites. Chile no puede acoger indefinidamente a todos quienes desean ingresar, y reconocer esos límites no es falta de humanidad, sino una condición para una política migratoria sostenible.

—Hace poco estuviste en el norte investigando, ¿con qué impresión regresaste?

—Lo que más impacta es el nivel de abandono. Son zonas del país poco conocidas, donde la presencia del Estado es mínima o inexistente. El trayecto hacia Colchane es muy ilustrativo: kilómetros y kilómetros sin señalética, sin infraestructura y sin personas. En medio de ese vacío aparece un militar custodiando la frontera y luego nuevamente la nada. Eso obliga a preguntarse cómo se puede controlar el crimen organizado o los pasos fronterizos en un territorio donde prácticamente no hay Estado. Al conversar con esos militares queda claro que no es falta de voluntad. Son funcionarios que se sacan la mugre trabajando en condiciones muy precarias. Lo mismo ocurre con fiscales, policías y otros equipos del norte que, con pocos recursos, han logrado detener bandas extranjeras.

—¿Y qué te parece el nombramiento como ministra de Seguridad de Trinidad Steinert, una fiscal con experiencia en investigaciones contra el crimen organizado?

—Me parece bien; la fiscal Steinert hizo un gran trabajo en Tarapacá. Lo que han hecho en el norte las fiscalías con el crimen organizado, sobre todo en Iquique y Arica, es destacable. Y a nivel político también es simbólico: muestra que la derecha puede mirar más allá de Santiago y buscar personas en otros territorios. Eso es algo que en los gobiernos de derecha anteriores no se veía. Habrá que ver cómo se traduce todo esto en gestión política capaz de hacerse cargo de las altas expectativas de la gente en la materia.